

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara por los Sres. Alvarez Araujo y Compañía y otros comerciantes de la capital de ese Estado, contra el cobro del uno y medio por ciento que la administracion principal de rentas les exige, por los caudales que ponen en las conductas ordinarias.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

Los Sres. Alvarez, Araujo y Compañía, y otros comerciantes de esta capital, entablaron amparo á principios de este mes, contra el cobro del uno y medio por ciento que la administracion principal de rentas del Estado les exige, fundada en el decreto núm. 357, por los caudales que ponen en las conductas ordinarias, y pedian al mismo tiempo la suspension del acto reclamado. Como los expresados comerciantes no designaban ni la cantidad que pretendian extraer, ni la conducta en que lo habian de verificar, el suscrito hizo notar al juzgado que no solo faltaba en el ocurso el señalamiento del acto sobre que se pretendia recayera el decreto suspensivo, sino que en realidad se solicitaba una declaracion general contra el decreto núm. 357 del Estado, terminantemente prohibida por los arts. 102 de la Constitucion y 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, y por lo mismo, que mientras los quejosos no hicieran la designacion indicada, no debia de sustanciarse el juicio.

Conforme el juzgado con dicho parecer mandó devolver su escrito á los interesados y que se desglosara del expediente el dictámen fiscal.

“El 10 del corriente Setiembre han vuelto á presentar su ocurso de amparo los mismos comerciantes que suscribieron el anterior devuelto, pero precisando ya esta vez,

que la cantidad que se proponen remitir por la conducta ordinaria anunciada para este mes, es de trescientos cincuenta mil pesos, y alegando que el administrador principal de rentas de esta ciudad, fundado en el decreto del Estado núm. 357, les exige el uno y medio por ciento sobre la cantidad referida, por derecho de extraccion, cuyo cobro á su juicio es contrario á lo prevenido en la frac. 1ª, art. 112 de la Constitucion, y por lo mismo, el cobro que se les hace ataca en sus intereses la garantía que ese artículo les concede, y apoyados en la frac. 1ª (probablemente del art. 1º) de la ley de 20 de Enero de 1869, entablan el reclamo correspondiente, solicitando que ante todo se suspenda el acto de que se quejan.

“El juzgado decretó dicha suspension contra el parecer del suscrito, y, obligado por la urgencia del caso, sin recabar ese parecer, ha hecho lo mismo en los dos juicios posteriores que los Sres. Alvarez, Araujo y Compañía, promovieron por igual motivo y con el propio fin que el presente, uno por remision de sesenta mil pesos y otro por la de quince mil, mandando, con razon, se acumularan á estos autos, por no ser mas que verdaderas ampliaciones en cantidad á la de trescientos cincuenta mil pesos, fijada en el primer escrito de los promoventes.

“Todavía no se registra en el expediente prueba alguna con que los peticionarios traten de hacer presumir al juzgado su intencion de llevar al extranjero los caudales de que se ha hecho mérito:

El promotor supone, que así como en los juicios anteriores, en el término de prueba que se concede presentarán para comprobar su intento la certificacion de la jefatura de hacienda, de haber sacado guías de exportacion y pagado los derechos correspondientes; pero si en aquellos juicios ha sido bastante esa prueba de presuncion para que los interesados consigan su objeto, el suscrito espera de la integridad é ilustracion del juzgado y especialmente de la impar-

cialidad y acierto que distinguen al primer tribunal de la nación, que no sucederá lo mismo en el presente amparo.

1º Porque el decreto núm. 357 del Estado, en que se apoya el cobro del uno y medio por ciento por extracción de caudales, no es contrario á la frac. 1ª, art. 112 de la Constitución, que se refiere á importaciones y exportaciones, siendo evidente en todos sentidos, que esta fracción constitucional hace relación al comercio con el extranjero, mientras que aquel decreto, al gravar la extracción de caudales del territorio de Jalisco, solo afecta al comercio de Estado á Estado.

2º Porque si se alega que en último análisis el cobro por extracción que hace Jalisco afecta muy directamente á la exportación, resultando la plata cuando se embarca, tanto mas gravada, cuanto importa aquel cobro, esto es aplicable también al café, á la azúcar, al tabaco, á todos los productos nacionales; y no por ello se ha dicho ni se puede sostener que sean anticonstitucionales los impuestos locales con que están gravados en toda la república.

3º Porque ni la circunstancia de estar convertido en moneda el producto gravado con el uno y medio por ciento, ni la de que á los poderes federales corresponda exclusivamente la emisión, la reglamentación y vigilancia de aquella, considerada como tipo legal para los cambios, puede hacer variar el aspecto de la cuestión, puesto que entre esas facultades no está comprendida la de gravarla también exclusivamente, y que en la moneda existe siempre la materia, el metal de que está formada, y á esa materia como producto nacional, por el valor intrínseco que tiene, que es también por lo único que se lleva al extranjero y se aprecia en los mercados europeos, es á la que grava el Estado.

4º Porque, prescindiendo de lo dicho, si en los juicios anteriormente entablados contra el mismo uno y medio por ciento, han sido amparados los peticionarios por la in-

tegridad de ese juzgado, que puede establecer como prueba inequívoca de la exportación directa que se iba á ejecutar de los caudales ú objetos puestos en conducta, la presunción fundada en que los interesados habían sacado de la jefatura de hacienda guías de exportación y pagado los derechos correspondientes, lo que á su parecer no habrían hecho si no tuvieran tal intención, en el presente juicio no cabe la misma suposición para justificar el amparo, puesto que contra la realidad de los hechos no caben las presunciones, y la experiencia ha demostrado de una manera irreplicable, que si los comerciantes toman guías de exportación en la oficina de hacienda federal, es únicamente para defraudar los derechos que les cobra el Estado, pero no para exportar los objetos metálicos que ponen en las conductas,—con mucha frecuencia la morralla que es inexportable,—ejecutando con estos pagos, situaciones de fondos y otros negocios de comercio interior en México y Colima, y vendiendo después sin pérdida alguna las guías, que les sirvieron de salvoconductos, para cubrir con ellas monedas diferentes de las que de aquí salieron, que son realmente las exportadas por Veracruz ó Manzanillo.

La circunstancia de que á poco tiempo de salida una conducta, vienen, con relación á las mismas cantidades extraídas de esta ciudad, tornaguías de México para la aduana del Estado, y de Veracruz para la jefatura de hacienda, ha demostrado hasta la evidencia lo que se deja expuesto, como lo hace notar en su informe á ese juzgado el ciudadano administrador principal de rentas.

“Omite el promotor otras varias consideraciones por la brevedad del tiempo que tiene disponible, y porque cree suficiente sobre el particular referir el informe rendido por la oficina ejecutora del cobro reclamado, y á la amplia discusión que con motivo de los tres amparos anteriores ha tenido este negocio, y por lo dicho

"Conculyo pidiendo: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los peticionarios contra el acto de que se quejan.

"Guadalajara, Setiembre 29 de 1874. —(Firmado) A. Camarena."

Es copia.—Guadalajara, Setiembre 29 de 1874. A. Camarena.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Guadalajara, Octubre 31 de 1874.— Vistos: Los Sres. Alvarez, Araujo y Compañía, Oetling, Francisco M. Negrete, Fernandez y Compañía, y p.p. Oetling Riensch, German Hell, entablaron ante este juzgado, juicio de amparo y proteccion de garantías, fundándose en la frac. 3ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, contra el ejecutor de las leyes del Estado, que impone el uno y medio por ciento, sobre la extraccion de plata acuñada en conducta ordinaria, fundándose, en que habiendo sacado guia de exportacion, en la jefatura superior de hacienda del Estado, y pagado el cinco por ciento que con arreglo al arancel de aduanas marítimas, debe satisfacerse á la federacion, por tratarse de conducta de comercio exterior, las autoridades del Estado no han podido regravar los derechos satisfechos de exportacion, por prohibirlo la frac. 1ª del art. 112 de la Constitucion general. Pidieron tambien los interesados la suspension del acto reclamado, por considerarlo urgente.

Pedido informe al ciudadano administrador de rentas como ejecutor del acto reclamado, conforme al art. 9 de la ley de 20 de Enero de 1869 lo evacuó, concluyendo con los parrafos numerados como siguen:

"1º Que los Señores comerciantes, piden amparo contra la ley del Estado, fundados en que los caudales van destinados á exportarse para el extranjero, designando el puerto á donde se dirigen:

2º Que los tribunales federales, han concedido el amparo bajo la misma condi-

cion, aceptando que sea del conocimiento de la federacion los actos peculiares, pero sin desconocer el comercio interior y los derechos de los Estados, cuando realmente los caudales no se exportan, y por fin:

3º Que de una manera justificada, esta administracion ha llamado la atencion de los propios tribunales, sobre que dichos caudales, han quedado en el país."

Recibido este negocio á prueba, el representante de los interesados promovio se librara oficio al jefe superior de hacienda, á fin de que certificara haber expedido guias de exportacion previo el pago del derecho de cinco por ciento á las casas que han solicitado amparo. El ciudadano jefe de hacienda, como resultado del oficio que por este juzgado se le libró, remitió un estado, visible á fojas 27.

Este juzgado,

Considerando: 1º que está justificado en autos con el estado remitido por el ciudadano jefe superior de hacienda á peticion de los interesados, que la conducta salida de esta capital para el puerto de Veracruz, el día 20 del actual, vá con el objeto de ser exportada.

2º Que el art. 112 de la Constitucion, es claro, pues su tenor es:

"Tampoco pueden los Estados, sin consentimiento de la Union:

1º Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puerto, ni imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones y exportaciones."

3º Que estaria por demas la frac. 1ª del art. 112 de la Constitucion general, si no tuviera la interpretacion que ya le dió la Suprema Corte de Justicia, en distintas sentencias, que en idénticos casos ha pronunciado, y

4º Que es imposible suponer que se defraudaran los derechos de los Estados, en caso de accederse á la solicitud de los peticionarios, pues aun cuando sea voluntario para el comerciante manifestar que exporta, esa manifestacion lo obliga á sacar

guias federales y pagar el cinco por ciento de exportacion, en vez del uno y medio por ciento del Estado.

Por estas consideraciones y fundamentos, y apoyado ademas este juzgado en la ley de 20 de Enero de 1869, falla con las proposiciones siguientes.

1.^a La Justicia de la Union ampara y protege á las casas de comercio que sacaron guias federales para los fondos mandados en conducta salida de esta capital el 20 del mes próximo pasado, y á que se refiere el certificado de la jefatura de hacienda del Estado, siendo estas las de los Sres. Alvarez, Araujo y Compañía, Oetling, Francisco M. Negrete, Fernandez y Compañía, y p.p. Oetling Riensch, German Hell.

2.^a Notifíquese, publíquese y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.
—D. Y. Trejo.—G. J. Gallegos.

Es copia. Guadalajara, Noviembre 9 de 1874.—G. J. Gallegos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 9 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Jalisco por los Sres. Antonio Alvarez del Castillo, Alvarez Araujo y C^{ia}, Oetling y C^{ia}, Francisco Martinez Negrete, Fernandez y C^{ia}, Fernandez Somellera hermanos, Fernando Peña y hermanos, Teodoro Kunhardt, Angel B. y Puga, Basabe y Arce, Corbera y Gonzalez Rubio del comercio de Guadalajara, por invasion de las facultades consignadas al Legislativo de la Union en la fraccion 1.^a del art. 112 de la Constitucion federal.—Visto el informe de la autoridad responsable, el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios lo-

gales fundamentos la sentencia del Juez de Distrito que ampara á los promovientes arriba mencionados.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—M. Auza.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José Garcia Ramirez.

Certifico: que el C. Ministro Manuel de Castañeda y Nájera, intervino en la votacion de este amparo, y que por haber fallecido antes de firmar la sentencia anterior, no aparece en ella su firma. México, Febrero 8 de 1875.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 8 de 1875.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Othon Wegelin, contra el cobro de la cantidad de novecientos nueve pesos cuarenta y cinco centavos que á título de derechos de consumo, contribucion federal y gastos de cobranza, le hace el administrador de la aduana terrestre de Mazatlan.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El presente juicio de amparo, no es diverso de los otros que ha promovido el Sr. D. Othon Wegelin, sino en cuanto á que se